
Editorial

El fenómeno El Niño, que se inició a comienzos de otoño del hemisferio sur en 1997, ha tenido para el Perú consecuencias hasta ahora –fines de febrero de 1998– comparables con las ocurridas en 1982-83. Pero El Niño actual está todavía en pleno proceso: el balance de sus efectos hasta hoy sugiere ciertamente que este Niño será aún más destructivo que el anterior.

En esa oportunidad, el grado de intensidad de las lluvias en la costa norte principalmente –insólitas por su extraordinaria abundancia– estuvo acompañado de una sequía gravísima en la sierra sur. Los efectos en las ciudades –destrucción de viviendas e infraestructura urbana– y en el campo –inundaciones en algunas zonas y absoluta falta de agua en otras– se sumaron para constituir un verdadero desastre nacional. Las personas afectadas por la pérdida o deterioro de sus bienes y por diversas enfermedades han sido centenares de miles; las pérdidas de infraestructura y de la base productiva destruida se calcularon en más de mil millones de dólares.

Los especialistas –oceanógrafos y meteorólogos– afirman que no hay un Niño igual a otro, ni en sus manifestaciones ni en sus efectos. El que hoy azota el Perú y otros países ciertamente tiene dos peculiaridades destacadas. La primera es su larga duración como fenómeno intenso: lleva casi un año y no se sabe cuántos meses más transcurrirán antes de que se extinga, pero con seguridad ello no ocurrirá antes de entrado nuevamente el otoño. La segunda peculiaridad es su intensidad. Hasta hace algunos pocos meses, reconocidos científicos afirmaban que, aunque era imposible precisar las características que el nuevo Niño tendría, de ninguna manera podría alcanzar la intensidad del Niño del 83, entre otras razones por-

que aquél había sido el más intenso desde que existe registro escrito, es decir, desde la conquista española de fines del siglo XV y comienzos del XVI. Una repetición estaba contra todo cálculo de probabilidades.

Lo excepcional es, pues, que haya habido dos Niños de extraordinaria intensidad en apenas tres lustros. Lo que no es excepcional es la ocurrencia del fenómeno en sí: existen suficientes registros para afirmar que éstos se dan en periodos que varían entre tres y siete años. Ello plantea un problema de primera importancia: el grado de preparación de la sociedad para «administrar» el fenómeno. Es cuando ocurren las situaciones extremas –1983 y la actual– que queda al descubierto que esta preparación varía entre la insuficiencia y la inexistencia. Y esto ocurre tanto a nivel de Estado y gobierno como de la sociedad civil.

Un primer problema –un doble problema– es el de las percepciones. En el Perú, El Niño es siempre una novedad, vivido como un evento extraño e irrepetible, aunque ocurre desde tiempos inmemoriales. Plantas aborígenes se han adaptado al ciclo de El Niño: el algodón País (*Gossypium peruvianum*), natural del norte peruano, resiste hasta siete años de sequía, el tiempo necesario para que aparezca un nuevo Niño que lo salve de la muerte.

Aparecido ya El Niño, sus efectos son percibidos sobre todo en la medida en que afectan a las ciudades: el exceso de lluvias y la crecida de los ríos las inunda, destruye su infraestructura y servicios y afecta las viviendas. La cobertura noticiosa, particularmente de la televisión, refuerza esta percepción sesgada hacia lo urbano. Este sesgo urbano caracteriza los esfuerzos preventivos del gobierno iniciados a mediados de 1997 –y los que se siguen realizando–, que se dirigen casi exclusivamente a las ciudades. Pero mientras que éstas son afectadas cuando hay exceso de lluvias y desborde de ríos (en los meses de verano), los efectos en el campo y sobre la agricultura eran ya observables –con la pesca ocurrió otro tanto– desde el inicio, al modificarse el ciclo vegetativo de las plantas y estimularse el desarrollo de plagas y enfermedades. A pesar de las evidencias, no se tomó ninguna medida para mitigar los efectos en el campo (lo mínimo necesario era dar asesoría técnica a los agricultores para adecuar las prácticas culturales a la tropicalización del clima), y actualmente una parte importante de la producción está afectada. Como consecuencia, hay decenas de miles de agricultores,

sobre todo pequeños, para quienes el fenómeno El Niño significa, según sea el caso, bordear, entrar o hundirse más en la pobreza. A los cambios climáticos que reducen o simplemente eliminan la producción, se suman también las inundaciones, la ruptura de la infraestructura de riego, el arrasamiento de los cultivos. Es prematuro saber cuál será la magnitud de los daños económicos y sociales en el campo, porque no hay información consolidada y porque el fenómeno está aún en pleno despliegue. Pero con seguridad las pérdidas superarán los pronósticos más pesimistas.

Un segundo problema es el de los estilos de actuación frente al fenómeno, específicamente la acción del gobierno y sus dependencias, y de la misma población. Desde el inicio el presidente de la república, Alberto Fujimori, asumió personalmente la dirección de las acciones preventivas –en especial el reforzamiento de obras de infraestructura, drenaje y protección de riberas de ríos, siempre dentro o cerca de las ciudades–, y ha continuado haciéndolo durante todo el desarrollo de El Niño, concentrando las acciones y las inversiones en el Poder Ejecutivo. Reconociendo la utilidad de las obras ejecutadas, éstas se realizaron haciendo sombra a las instituciones especializadas precisamente en enfrentar situaciones de emergencia –en especial al Instituto de Defensa Civil–. Los gobiernos locales fueron marginados y las instituciones de la sociedad civil no fueron tomadas en cuenta –cosa que sigue ocurriendo hasta hoy–, lo que fomenta la pasividad de la población y su dependencia de la presencia física del jefe de Estado o de alguno de sus ministros emisarios. Las pantallas de televisión invadidas por la imagen de un presidente convertido en superhombre, omnipresente, son el complemento perfecto de las patéticas escenas también televisadas en diferentes lugares en las que la población, desesperada, reacciona pidiendo la presencia del presidente o de alguno de sus emisarios como los únicos capaces de reponer las pérdidas materiales y de calmar el dolor y la enfermedad.

Esta pasividad y la escasa autoestima es la peor de las reacciones, pues ante fenómenos que afectan masivamente a la población, la mejor estrategia es su compromiso activo y autoconfianza. Sería necio desconocer el efecto deprimente que los desastres tienen sobre los individuos y las colectividades. Pero el conocido estilo autoritario y paternalista del presidente expresado en estas circunstancias refuerza estos sentimientos y pone de relieve la ineficiencia de su

«método», pues se muestra incapaz de estimular a las instituciones y a toda la población a enfrentar un problema que no es del gobierno, sino del país, y que, dada su magnitud, requiere de acciones concertadas de diferentes actores sociales. Las propias entidades públicas aparecen disminuidas y temerosas de adoptar decisiones osadas e imaginativas, adecuadas a la gravedad de los hechos, si no reciben previamente la bendición presidencial.

La reacción de la población ante desastres es un fenómeno que ha sido estudiado, y se conoce que puede ser distinta según sea la forma y la intensidad con la que entidades tanto públicas como privadas se aproximan a la población antes y después de esos eventos. Tomar en cuenta esta dimensión del problema es algo más complicado, pero al menos tan necesario como la aproximación ingenieril y vertical con la que suele atenderse situaciones de emergencia como la que vivimos*.

Si El Niño de 1983 dejó muy pocas enseñanzas, es preciso aprovechar las que puedan quedar del actual. El Ministerio de Agricultura, las facultades universitarias de agronomía, las diferentes instituciones promotoras del desarrollo agrario y las propias organizaciones de agricultores no pueden seguir actuando bajo el supuesto de hipotéticos «años normales», pues lo más frecuente es que cada año agrícola se acompañe en una u otra región de sequías o lluvias que escapan a los promedios. En particular, además de considerarse «años agrícolas» (de agosto a julio) con fines sobre todo administrativos y contables, debiera contemplarse **periodos agrícolas**, más cercanos a los ciclos naturales, de una duración promedio —si queremos aprender del algodón País— de siete años. Es dentro de cada uno de estos periodos que ocurren todas las «anormalidades», incluido probablemente un Niño (aun cuando el de 1983 y el actual sigan siendo realmente excepcionales). Un periodo septenal, con sus sequías e inundaciones sería, pues, normal, y facilitaría a las instituciones planificar mejor sus objetivos y actividades, y a ser naturalmente previsoras. Después de todo, en muchas partes del país los campesinos hacen aún reservas de semillas y

* Sobre la concepción de inspiración militar para enfrentar desastres naturales, refiérase al artículo de Eduardo Franco Temple: «El Niño: ¿Prevención de desastres o gestión del riesgo?», en la siguiente dirección electrónica: <http://www.rcp.net.pe/cepes-el-nino>, sección Documentos.

alimentos considerando la existencia de ciclos más largos que el año agrícola.

*La principal enseñanza es que no hay mejor prevención que una población preparada y un Estado que, además de debidamente equipado para afrontar situaciones críticas, confíe en sus ciudadanos y sus instituciones, y busque lograr con ellos las sinergias necesarias para enfrentar desgracias materiales y morales, que no pueden ser exitosamente afrontadas sólo con **bulldozers** y retroexcavadoras. Dada la magnitud de las tareas de reconstrucción, es necesario poner ya esta enseñanza en práctica.*

El Consejo Editorial